

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, dos (02) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, Francisco Arango Torres y John Jairo Acosta Pérez, proceden dentro del proceso ordinario con radicado número 05001-31-05-006-2015-00892-01 promovido por **EDITH MARCELA GARZÓN RAMÍREZ** contra **COMFENALCO ANTIOQUIA**, a resolver el recurso de apelación presentado por los apoderados de la parte demandante y demandada, contra la sentencia parcialmente condenatoria emitida el 29 de agosto del año 2016 por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, se toma la decisión correspondiente mediante

providencia escrita número **011 de 2023**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, la demandante elevó pretensiones en contra de Comfenalco, solicitando declarar que COMFENALCO actuaba como su verdadera empleadora desde 1 de junio del año 2006, y que dicha relación terminó de manera unilateral e injusta por parte del empleador desde el 1 de agosto de 2012. Por tanto, solicitó el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio, vacaciones, la indemnización por despido injusto, así como el reajuste de los salarios respecto a los que normalmente recibe una trabajadora vinculada directamente por la entidad.

Para fundamentar sus pretensiones expuso, que desde el año 2004, comenzó a laborar en las instalaciones de Comfenalco, como trabajadora en misión de la empresa de servicios temporales Empleamos S.A. Para el 1 de junio del año 2006, se vinculó laboralmente con la Cooperativa de Trabajo Asociado C.T.A. cooperativa creada por Comfenalco para tales fines, por lo cual, el servicio continuó de la misma manera en que se estaba efectuando con antelación.

Esgrime que percibía una asignación salarial en suma de \$1.474.000, con cuadro de turnos y horario que eran entregado por su jefe inmediato, el doctor Mario Aguilar, quien era el jefe auditor de la IPS Biosigno la América.

Narró que para el 2 de enero del año 2011, la Cooperativa de trabajo asociado la instó a renunciar a su cargo, a cambio de ser vinculada de manera directa con Comfenalco, allí continuó ejerciendo sus funciones de la misma manera que hasta la fecha lo realizaba con la cooperativa. Comfenalco, dio por terminado su contrato de trabajo para el 1 de agosto del año 2012, de manera unilateral. Explicó que la demandada pretendió enmascarar la relación laboral para evitar realizar el pago de los emolumentos a los que la demandante tenía lugar.

Admitida la demanda mediante auto del veintinueve (29) de septiembre del año dos mil quince (2015), folio 29 del expediente físico, y notificada la pasiva el dieciséis (16) de diciembre del año dos mil quince (2015) conforme folio 38, dio repuesta al libelo gestor por intermedio de procurador judicial así:

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, informando no ser ciertos los hechos narrados en la demanda, pues argumenta que su prohijada no creó cooperativa alguna, por ser un imposible jurídico a la luz de su objeto social. Explicó que la demandante presentó renuncia el día 1 de agosto del año 2012.

Propuso las excepciones de mérito que denominó “Prescripción”, “Buena fé”, “inexistencia de la obligación”, “compensación”.

En **sentencia del 29 de agosto del año 2016**, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, declaró que los servicios prestados por la demandante desde el 1 de junio del año 2006 por intermedio de Cooperativa de trabajo asociado Colaboramos fue en realidad una relación laboral con Comfenalco, absolviendo del pago de las demás pretensiones por haberse realizado el pago efectivo de los mismos.

RECURSO DE APELACIÓN

Inicialmente presentado por la parte demandante indicando, que, si bien se expuso por parte de los testigos y la demandante que fueron pagadas las prestaciones sociales legales debidas por parte de la Cooperativa, dichos rubros no fueron cancelados por el verdadero empleador, y por ende es un pago mal realizado que debe ser asumido por la demandada en el presente proceso, sin que pueda avalarse un pago ilegal, pues lo que se paga no son derechos laborales sino, derechos cooperativos y en tal razón solicita la revocatoria, y se ordene el pago de las acreencias laborales ordenadas.

De igual manera el apoderado de Comfenalco interpone recurso de apelación, pues dice que la cooperativa no hace parte de la estructura de negocios de Comfenalco, pues ello no fue probado en el proceso, deriva de una mala interpretación de la certificación dada por la cooperativa y que fue incorporada al expediente. Explicó que como beneficiaria de la labor que realizaba la cooperativa no contaba con la documental que enunció la juez de instancia debió aportarse, como es el cumplimiento de la demandante de la formación en trabajo cooperativo.

Explicó que la conclusión arrojada por la juez respecto a que su prohiada se vio presionada en contratar a la demandante para limitar el uso de las cooperativas de trabajo asociado, no es una situación que haya sido objeto del debate probatorio. Argumentó que en el proceso quedó debidamente probado que la demandante de manera libre y voluntaria se asoció a la cooperativa, quien finalmente autogestionaba a sus asociados respecto al rumbo que debían tener sus trabajadores, pues contaban con personal que orientaban e instruían a los asociados sobre la manera en que debía desempeñar la labor del demandante. Igualmente, aclaró que la vigilancia del cumplimiento de las órdenes de la superintendencia nacional de salud, sin que pueda entenderse como una subordinación.

Preliminarmente se hace necesario exponer que, corrido el traslado para alegar, ninguna de las partes presentó alegaciones ante esta instancia.

PROBLEMA JURÍDICO

En atención a los recursos de alzada interpuestos, consiste en determinar, si existió o no una verdadera relación laboral entre la demandante y Comfenalco desde el 1 de junio del año 2006, y de ser así, si se adeuda pago alguno por prestaciones sociales adeudadas.

CONSIDERACIONES

Frente al recurso promovido, la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad los Arts. 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

Respecto a la intermediación laboral que se predica en el proceso, y la voluntad de enmascarar dicha relación contractual, en sentencia C 211 de 1 de marzo de 2000 la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 59 de la Ley 79 de 1988, explicando, que las cooperativas de trabajo asociado nacieron de la voluntad libre y autónoma de un grupo de personas que se unen para trabajar mancomunadamente bajo las reglas contenidas en los estatutos o reglamentos internos. En este tipo de acuerdo, los socios son precisamente los mismos trabajadores y por ende, pueden pactar las reglas que han de gobernar las relaciones laborales, las cuales, pueden estar al margen de las normas que tradicionalmente regulan el trabajo.

Bajo esta premisa, todos los asociados tienen derecho a recibir una compensación por el trabajo aportado y a participar en la distribución equitativa de los excedentes que obtenga la cooperativa. Sólo en casos excepcionales, y en forma transitoria u ocasional se les permite contratar trabajadores no asociados, quienes deben regirse por la legislación laboral vigente.

Así las cosas, la Cooperativa de trabajo asociado, tienen como situación particular que sus socios son simultáneamente dueños y trabajadores de aquella, es decir, existe identidad entre asociado y trabajador, sin la posibilidad de hablar de empleadores y trabajadores, como en las relaciones de trabajo subordinado, razón por la cual a los socios-trabajadores de tales cooperativas no se les aplican las normas del Código Sustantivo del Trabajo.

Ahora, los artículos 17 del Decreto 4588 de 2006 y 7 de la Ley 1233 de 2008 prohíben expresamente a las cooperativas o preoperativas actuar como empresas de intermediación laboral, disponiendo del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión, con el fin de que estos atiendan labores o trabajos propios de un usuario o

tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes, pues es en ese momento, cuando se desdibuja la existencia de la relación laboral, teniendo derecho el trabajador, en esas condiciones, a que se le considere como trabajador dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficia de su trabajo; a que se le aplique la legislación laboral y no la comercial o civil; y a que el tercero contratante, la Cooperativa o Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos sean solidariamente responsables de las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado.

En sentencia CSJ SL 25713-2006, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, precisó que cuando una persona natural o jurídica contrata a una cooperativa de trabajo asociado para prestar un servicio, ejecutar una obra o producir determinados bienes, y los trabajadores que adelantan la ejecución de las actividades en desarrollo del respectivo contrato se encuentran sujetos a subordinación laboral respecto de la beneficiaria, deben ser considerados como trabajadores de la beneficiaria para todos los efectos legales, por concurrir los elementos que configuran una verdadera relación de trabajo, en atención al principio de la primacía de la realidad sobre las formas que consagra el artículo 53 de la Constitución Nacional.

Así es, que deben existir elementos diferenciadores que dan pie a entender si la relación laboral existe o no: 1) El condicionamiento del pago del aporte al cumplimiento de las condiciones señaladas por la cooperativa o por un tercero; 2) El uso del poder coercitivo o disciplinario sobre el asociado; y 3) La dependencia y subordinación del asociado en relación con el tercero al que debe prestar sus servicios, así como las condiciones de trabajo. (Sentencia de Constitucionalidad 645 de 2011)

En reciente providencia SL1413-2022, la Corte Suprema de Justicia hizo claridad sobre el tema así:

“Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado son aquellas empresas sin ánimo de lucro que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la

prestación de servicios económicos, profesionales, intelectuales o científicos, para lo cual fijan sus propias reglas conforme a las disposiciones legales y con las cuales autogobiernan sus relaciones. En este sentido, una característica principal de tales entes es que sus asociados gozan de plena autonomía técnica, administrativa y financiera en la prestación de sus servicios, y por ello no se rigen por la legislación sustantiva y ordinaria laboral.

Sin embargo, cuando esta forma de contratación se utiliza de manera fraudulenta para disfrazar u ocultar la existencia de una verdadera relación subordinada, la Corte ha considerado que se incurre en una indebida e ilegal intermediación laboral, expresamente prohibida en los artículos 7.º de la Ley 1233 de 2008 y 63 de la Ley 1429 de 2010, los dos últimos reglamentados por el Decreto 2025 de 2011. Asimismo, ello acarrea como consecuencia la declaratoria del contrato realidad del trabajador asociado disfrazado con la empresa que se benefició de sus servicios y, por tanto, esta debe responder solidariamente junto con la cooperativa de trabajo asociado por todos los efectos jurídicos laborales derivados.

Lo anterior porque en estos eventos se entiende que la precooperativa o cooperativa actúa como simple intermediaria en los términos del artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el numeral 3.º del artículo 7.º de la Ley 1233 de 2008, que consagra la solidaridad para el caso específico de la intermediación laboral a través de las cooperativas y prohíbe expresamente que aquellas actúen como intermediarias o empresas de servicios temporales a fin de suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión (CSJ SL2842-2020). Incluso, con tales actuaciones ilegales la entidad cooperativa puede verse incurso en causales de disolución y liquidación y perder su personería jurídica, además de ser acreedora de diversas sanciones.

En esa dirección, la Corporación ha adocetrinado que la prohibición de actuar como simples intermediarias en el caso de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado se acentúa especialmente en el marco de servicios y actividades misionales permanentes que se relacionen directamente con la producción del bien o servicios característicos de la empresa usuaria. Sobre este particular, debe tenerse presente que en la sentencia CSJ SL5595-2019 la Corporación asentó:

El personal requerido en instituciones o empresas para el desarrollo de actividades misionales permanentes, no puede estar vinculado a través de cooperativas que hagan intermediación laboral o bajo otra modalidad contractual que afecte los derechos laborales y el empleo en condiciones dignas de los trabajadores.

Ello precisamente se extrae del citado artículo 7.º de la Ley 1233 de 2008 y del Decreto 2025 de 2011, que en su artículo 1.º definió que «se entiende por actividad misional permanente aquellas actividades o funciones directamente relacionadas con la producción del bien o servicios característicos de la empresa» (subraya la Sala).

Asimismo, es oportuno mencionar que si en el asunto en concreto se acredita que la cooperativa y por tanto el trabajador o trabajadores asociados no son dueños de los medios de producción o laborales, la Corte ha precisado que si bien ello no acredita como tal la subordinación, es sin duda un elemento indicativo de que el vínculo de trabajo asociado no es real sino meramente aparente y esconde así la pretensión empresarial de deslaboralizar el personal de una operación del proceso productivo de la empresa usuaria a través de un ente que carece de una estructura propia y especializada, ni es autónoma en su gestión administrativa y financiera (CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 30605, CSJ SL665-2013, CSJ SL6441-2013, CSJ SL12707-2017 y CSJ SL1430-2018). “

Bajando al caso que cupa la atención de la Sala, reposa en el expediente físico folio 13 certificación de la cooperativa en donde se dejó constancia que la señora Edith Marcela Garzón Ramírez , prestó mediante acuerdo cooperativo de Trabajo asociado, servicios en la unidad de negocios de Colaboramos, Comfenalco, desde el 1 de junio del año 2006.

Dicha certificación fue tomada en cuenta por la juez de instancia como prueba respecto a que Colaboramos CTA era parte de la estructura de negocios de Comfenalco, situación, que fue objeto de apelación por la pasiva.

Es importante precisar que de la lectura de dicha certificación solo se puede constatar que, la demandante hacía parte de la unidad estratégica de negocios de Colaboramos, Comfenalco, entendiéndose, éste como el nombre del contrato y no, que necesariamente la CTA sea parte de la estructura de negocios de la aquí demandada, pues esa situación no fue objeto de debate probatorio como bien lo indicó el apelante, por lo cual, dicha conclusión es infundada.

Reposa también certificación expedida por Comfenalco en página 14 del expediente físico en donde exponen que, la demandante tuvo con la entidad un contrato a término indefinido desde el 3 de enero del año 2011 y hasta el 1 de agosto del año 2012, contrato de trabajo suscrito con Comfenalco folio 48-51 y contrato de asociación suscrito por la actora y la CTA Colaboramos folio 56-59.

Se recepcionó en audiencia los testimonios de: Isabel Cristina Castrillón y Yudis Cuadrado Torres testimonios de los cuales se da cuenta que en el desarrollo de las labores la señora Edith Marcela Garzón Ramírez prestó sus servicios con Comfenalco desde el año 2011 en idénticas condiciones en las que la estaba efectuándolo para la Cooperativa Colaboramos desde el 1 de junio del año 2006, pues precisamente fue citada en reunión en las instalaciones de Comfenalco para explicarle su nueva modalidad contractual, todo esto, en la IPS de propiedad de la Caja Comfenalco.

Por su parte, el señor Raúl Antonio Soto testigo arrimado por la pasiva, nunca tuvo a su cargo el área de enfermería de la cual, hacía parte la demandante y por ende, pocas luces trajo al proceso, y el señor Gustavo Alberto Trujillo Aramburo expuso que para el momento en que la demandante prestó el servicio con la cooperativa, el coordinador de Comfenalco velada por el mejor resultado para la entidad en el desarrollo de la contratación civil, pero su testimonio, no tiene la fuerza suficiente

para desdibujar la narrativa de las señoras Castrillón y Cuadrado, compañeras de trabajo de la actora.

En atención a lo explicado, la prueba recaudada da cuenta de los elementos que según la jurisprudencia analizada permiten identificar la existencia de una verdadera relación de trabajo entre la señora Edith Marcela Garzón Ramírez y Comfenalco entre el 1 de junio del año 2006 y el 1 de agosto de 2012.

Respecto al pago de las prestaciones sociales, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicio, prima de vacaciones, y que la demandante aceptó en el interrogatorio de parte haber recibido por la cooperativa, es importante aclarar lo siguiente:

Si bien el procurador judicial de la parte actora enuncia que no puede darse validez a un pago que fue realizado como derechos cooperativos, también lo es que fue clara en su interrogatorio la actora en expresar que percibió siempre el pago de las prestaciones legales a las que hubo lugar desde el año 2006 y hasta la terminación de su contrato con la cooperativa.

Es por ello, que ante la declaratoria de un contrato realidad, los concepto efectivamente pagados a la demandante por la Cooperativa, tienen la fuerza vinculante respecto a Comfenalco, pues al desaparecer el manto de la cooperativa y entenderse como simple intermediario, siendo Comfenalco solidariamente responsable de las acreencias laborales, debe entenderse satisfecho su pago pues ordenar nuevamente estos, equivaldría a una doble asignación a favor de la demandante sin fundamentación alguna.

En consecuencia, se **confirmará** la sentencia, por diferentes argumentos a los dados por la juez de primera instancia.

Sin costas en esta instancia, ante la improsperidad de los recuso de las partes.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión que se revisa en virtud del recurso de apelación presentado por la parte demandante y demandada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **06565fa39a1d626be5d2a1cb21291ffe474f0af20a5957c879c5a89faeba33e1**

Documento generado en 02/02/2023 03:28:01 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>